

Una mirada sobre la transformación del campo: el caso de los agrocombustibles en Colombia

5



PAULA ÁLVAREZ ROA*

A esta altura ya queda en evidencia la irracionalidad de la propuesta de los agrocombustibles y su carácter ilusorio: no hay superficie agrícola en todo el planeta capaz de aportar los sustitutos agrocarburantes exigidos por el fenomenal derroche de hidrocarburos en que, para satisfacción y rentabilidad de los grandes oligopolios ligados a la energía, se encuentra inmersa la civilización capitalista (Borón, 2007).

Introducción

Los proyectos de agrocombustibles dan lugar a nuevas alianzas entre los productores y los proveedores locales de cultivos con empresas extranjeras. Lo común es que los inversionistas extranjeros creen empresas conjuntas con compañías controladas por grandes familias dueñas de vastas extensiones de tierra y con poder político y hagan que esas familias controlen el sector de la producción. Los agrocombustibles profundizan, de esta forma, las relaciones entre capital transnacional y las élites locales, con serias consecuencias para las luchas por la tierra y la producción local de alimentos (Grain, 2007).

En la política agraria del Gobierno colombiano hay un fuerte impulso hacia la producción de los agrocombustibles. Este es un tema central y por ello

* Politóloga e investigadora (correo-e: paula_alvaroa@hotmail.com).

se han ejecutado reformas encaminadas a otorgar garantías a quienes están en el negocio y otras tantas para atraer a nuevos inversionistas, con quienes se dice que Colombia renacerá, ya que se consolidará la política de seguridad democrática, se aliviará la pobreza, se erradicarán los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, se crearán nuevos empleos, se regenerará el tejido social y se avanzará hacia el desarrollo sostenible del país en lo económico, social y cultural; además, tal política constituye un aporte a la seguridad energética, a la recuperación de suelos, a la reconversión del aparato productivo rural y, de paso, permitirá que el país cumpla con los objetivos del protocolo de Kyoto.

Por intermedio del Ministerio de Agricultura se desarrollan iniciativas tendientes a la ampliación de la siembra de cultivos soporte de los agrocombustibles, para lo cual se propician las condiciones para la inversión, la promoción de leyes como la del Estatuto de Desarrollo Rural, agro-ingreso seguro y forestal, que benefician al sector privado, para alentar que este oriente su producción a los agrocombustibles.

El Gobierno, en consecuencia, ha aprobado exención de impuestos a los productores de agrocombustibles, ha fijado la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol, ha expedido resoluciones para incrementar los precios, ha declarado zonas francas especiales, ha brindado estabilidad jurídica para los inversionistas; es decir, se ha creado una plataforma de garantías para los productores y dueños del negocio en el mercado doméstico, con miras a la exportación, todo ello acompañado por diversos centros de investigación como el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), que recibe millonarias inversiones públicas y privadas para que desarrollen nuevas variedades de caña de azúcar, yuca, etc., y elaboren estudios de mejoramiento genético y transferencia de tecnología.

Este artículo pretende, entonces, debatir algunas de esas tesis, en consideración al criterio de que la problemática de los agrocombustibles radica en la apropiación del uso de la tierra, cuyos impactos ambientales, económicos y en las condiciones de vida de las poblaciones rurales serán mucho más graves que hasta ahora.

Nos encontramos frente a un panorama realmente preocupante de transformación del campo, con impredecibles consecuencias en la soberanía alimentaria, la biodiversidad y, en el caso colombiano además, con el incremento de la acción armada de las organizaciones al margen de la ley.



Contexto internacional latinoamericano

Varios Gobiernos están asignando importantes subsidios para desarrollar la producción de etanol y agrodiesel, además de estar cambiando las regulaciones para asegurar mezcla de combustibles fósiles con agrocombustibles. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre este tema, en el continente americano, muestra que 27 de 50 países han emprendido este tipo de regulaciones.

Sin embargo, es ampliamente conocido que muy pocos de los programas de agrocombustibles que se impulsan son viables económicamente, puesto que requieren elevados aranceles de protección y excesivas subvenciones, sin mencionar los altos costos ambientales y sociales que representan, tales como deforestación, alza en precios de los alimentos, desplazamiento de poblaciones rurales y cambio en el uso de la tierra, entre otros.

El BID promueve como "oportunidad transformadora" todo lo relacionado con los agrocombustibles y los presenta como grandes generadores de inversiones, desarrollo y empleo en áreas rurales. En ese marco lidera el programa de "energía verde", que incluye inversiones por 300 millones de dólares, así como asistencia técnica para la producción de etanol a partir de la caña de azúcar en Centroamérica. En el caso de Colombia existe una financiación de 20 millones de dólares para producir 100.000 toneladas anuales de agrodiesel a partir de palma aceitera y estudios de otras materias primas para la producción de etanol.

El Departamento del Sector Privado del Banco está estructurando financiamiento de deuda prioritaria para tres proyectos de producción de etanol en Brasil, que tendrán un costo de 570 millones de dólares, junto con otros proyectos que alcanzarán los 2.000 millones de dólares. Según el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, esta inversión contribuirá a que Brasil triplique su producción anual de etanol para el año 2020.

En Costa Rica y El Salvador el BID financia estudios de factibilidad y asistencia técnica en regulación, desarrollo de mercado y educación pública, para que los Gobiernos alcancen la meta de reemplazar 10% de su actual consumo de gasolina con etanol.

El BID, entonces, es un actor clave en la formulación y apoyo de la expansión de la red de agroindustrias del etanol y trabaja en estrecha relación

con la Comisión Interamericana de Etanol, con el fin de promocionar así su mercado mundial, mediante una estrategia que pretende expandir la producción y, al mismo tiempo, su consumo. Pero llama la atención que el propio BID reconozca que, pese a que las inversiones llegarían a los 200.000 millones de dólares, los agrocombustibles solo cubrirían el 5% de la demanda de cincuenta de los principales mercados del transporte en el mundo.

Agrocombustibles como fuentes de energía

La promoción que desde las instituciones financieras internacionales y de los Gobiernos se hace acerca de los agrocombustibles se basa en la afirmación de que estos son una nueva fuente de energía "verde" y amigable con el medio ambiente. Casi toda la información propagandística de esta industria la promete como energía limpia, promesa que resulta en cierta manera atractiva, dado el gran problema del calentamiento global debido a las emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles.

Lo que no se indica es que vastas extensiones de tierra son ocupadas y arrasadas para hacer sitio a las plantaciones que, posteriormente, servirán para la producción de los agrocombustibles; así sucede con los bosques tropicales que se deforestan para plantar miles de hectáreas de palma aceitera, caña de azúcar y otros cultivos para la industria.

Luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, George Bush, de que con los agrocombustibles se dependería menos del petróleo, el tema cobró mucha fuerza, pero lo que pocos se han preguntado es el por qué del cambio de posición del Gobierno norteamericano frente a temas como el del calentamiento global. Recordemos que Bush sostenía que el Protocolo de Kyoto era una amenaza para el modelo de vida estadounidense, razón en la que apoyó su negativa a suscribirlo, y, por el contrario, anunció que desarrollaría aún más su industria con el uso de mayores cantidades de petróleo y combustibles fósiles. Pero sorpresivamente, en 2006, hay un viraje en su discurso y convoca las voluntades para mitigar las consecuencias del calentamiento global, apareciendo así los agrocombustibles como una de las soluciones para atenuar el calentamiento del planeta.

Pero, ¿cómo se explica este cambio de posición? Pues porque los agrocombustibles se habían convertido en un nuevo negocio, en un nuevo nicho para la inversión de capital. Por esta razón aparecen fenómenos como



los enormes subsidios a la producción de etanol, los escandalosos incentivos y el protagonismo de las grandes empresas productoras de cereales. Recordemos que hoy en día se produce etanol principalmente a partir del maíz; es así como se destacan empresas como Archer Daniels Midland Company (ADM) —una de las tres cerealeras más grandes del mundo, que con Cargill y Bunge tienen más del 75% del comercio de los cinco cereales (trigo, arroz, maíz, cebada y avena) principales en el mundo y controlan el 30% de la producción de etanol de Estados Unidos (Ribeiro, 2007)—. Estados Unidos tenía un excedente en la producción de maíz que no sabía en donde colocar y, por ello, en 2002 crea la producción de etanol con base en maíz, punto de partida de la euforia en las bolsas de valores por el alza en los precios del maíz.

Otro aspecto importante a considerar es el que la producción de agrocombustibles requiere de mayor energía que la que se produce, debido al uso intensivo del petróleo para obtención de los insumos de producción agrícola industrial y para las plantas de fabricación. Inclusive, según el cultivo que se utilice, se requiere hasta 45% más de energía fósil que la del combustible producido. Según David Pimentel, de Cornell University, y Tad Patzek, de la Universidad de Berkeley, la biomasa de madera, por ejemplo, requiere 57% más de energía fósil que el combustible elaborado, es decir, no hay beneficio de energía en la utilización de biomasa vegetal para producir combustible líquido, con lo cual se demuestra, en consecuencia, que los agrocombustibles no son sustentables.

Ahora bien, para que los agrocombustibles sustituyan la gasolina habría que multiplicar la frontera agrícola en forma exponencial, por lo cual el uso de agua sería descomunal y, como los cultivos son industriales, en sus grandes áreas también se requeriría un enorme uso de insumos químicos, con la consecuente elevación de los niveles de contaminación (Ribeiro, 2007).

Finalmente, en el Protocolo de Kyoto los agrocombustibles se presentan como reductores del efecto invernadero, pues con la utilización de la biomasa energética se disminuye el CO_2 de la atmósfera. Pero tal y como lo controvierte Elizabeth Bravo, con cultivos como el de la caña de azúcar se promueve un monocultivo mecanizado que requiere de agroquímicos y maquinarias, modelo productivo que se basa en el consumo de petróleo contaminante, lo que finalmente aumenta las emisiones de CO_2 , mientras los bosques captadores de carbono son eliminados para abrir camino a los cultivos destinados a los agrocombustibles.

Integración regional

El Gobierno colombiano ve la región de Centroamérica como de singular importancia, por lo que propugna una integración pragmática, espontánea, cambiante y aperturista (Ardila et al, 2005:100).

Con el Plan Puebla Panamá (PPP)¹ los países pretenden potenciar el desarrollo económico, por ello el Gobierno ha visto como estratégica su vinculación al Plan. De hecho hoy en día es quizás el proyecto más importante de la política exterior colombiana, ya que contempla un mercado superior a los 180 millones de habitantes, a una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, con PIB regional estimado en 2004 de 236.400 millones de dólares e inversión extranjera directa (IED) en 2005 de aproximadamente 10.332 millones de dólares.

En el año 2005 se dieron los primeros pasos para el ingreso de Colombia al PPP, con los argumentos de aprovechar nuestra posición geopolítica y servir de punto de articulación hemisférica. Es así como el país, en ese contexto, se convirtió en un actor significativo en la integración con Centroamérica y México.

Pero es en 2006 cuando Colombia se hizo miembro de pleno derecho del Plan Puebla Panamá, que contempla iniciativas como: interconexión vial, interconexión energética y gasífera, telecomunicaciones, desarrollo sostenible, desarrollo humano, facilitación comercial y competitividad, prevención, mitigación de desastres y turismo, e incluye temáticas como las de agrocombustibles y cambio climático.

En abril de 2007 los presidentes de los países del PPP se reunieron en Campeche (México), donde el presidente colombiano declaró el interés y destacó la importancia que tiene para el país el hecho de compartir y recibir avances y experiencias en agrocombustibles con los países del Plan Puebla Panamá, por lo que ofreció la instalación de dos plantas piloto en dos países del Plan (Guatemala y Honduras) y se le asignó a Colombia la coordinación y liderazgo del nuevo grupo de agrocombustibles para la región. En este proceso, y con la firma del tratado de libre comercio con los países del triángulo norte, en agosto se presen-

¹ El PPP está compuesto actualmente por nueve países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Belice y Colombia.



tó una solicitud de El Salvador como beneficiario de una tercera planta piloto de agrocombustibles, la cual fue aceptada por el presidente colombiano.

Cuatro ministerios colombianos pertenecen a la comisión intersectorial del PPP: el de Agricultura, quien se desempeña como coordinador técnico del tema de agrocombustibles para centroamérica; el de Minas y Energía, encargado de la interconexión energética y gasífera; el de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del desarrollo sostenible y el cambio climático, y el de Transporte, de la interconexión vial.

Sumado a esto, el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos se propone establecer que los agrocombustibles que se exporten no pagarán aranceles. Por esta razón en el país se aumentan las medidas que favorecen la producción de agrocombustibles, incluidos aspectos como el control de precios y la exención de los impuestos al consumo de etanol y agrodiesel, y, en el caso de la renta, para los cultivos sembrados entre 2003 y 2013 de palma de aceite, caucho, cacao y cítricos se han declarado zonas francas especiales, al igual que la exención del IVA, tanto para el agrocombustible como para las importaciones de materias primas y maquinarias para su producción.

En el recuadro 1 se encuentran las principales normas sobre las que se apoya la política colombiana en materia de agrocombustibles.

Estímulos al negocio

Con la aprobación de nuevas leyes en materia agraria se constata cómo el Gobierno se ha enfocado en la producción de agrocombustibles, principalmente con base en palma y caña de azúcar. Con el estatuto rural, por ejemplo, se funda un nuevo marco institucional para adecuar el campo al plan agroexportador de cultivos de tardío rendimiento, se otorgan apoyos, se financian proyectos productivos y se adjudican tierras. Con esos criterios es como se interviene el ordenamiento del territorio y se califica la propiedad rural, además de la de adecuación de las tierras que posteriormente serán entregadas a quienes presenten proyectos de agroindustria. Así mismo, el Gobierno subsidia con más de 120 millones de dólares al año a cinco ingenios para la producción de etanol (Valencia, 2007), como parte de la política que se impulsa desde el Ministerio de Agricultura, mediante decretos y resoluciones que exoneran de impuestos al sector y crean incentivos a la producción de etanol y agrodiesel.



Recuadro 1 Marco normativo

- ★ Ley 693 de 2001: estimula el uso y la producción del alcohol carburante, establece que a partir del 27 de septiembre de 2005 la gasolina en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla debe contener un 10% de alcohol carburante
- ★ Ley 788 de 2002: introduce las exenciones del iva, impuesto global y sobretasa al componente alcohol de los combustibles oxigenados
- ★ Resolución 180687 de 2003: el Ministerio de Minas y Energía reglamenta la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales e importados
- ★ Ley 939 de diciembre de 2004: establece que el agrocombustible de producción nacional para uso en motores diesel queda exento del iva y del impuesto global al ACPM
- ★ Resolución 351 de 2005: el Ministerio de Agricultura reglamenta los procedimientos para la inscripción y registro de los nuevos cultivos de tándem, con miras a la exención sobre la renta tributaria
- ★ Resolución 1289 de 2005: establece los criterios de calidad de los biocombustibles para su uso en motores diesel, impone la fecha del 1 de enero de 2008 como inicio de mezcla del 5% de agrodiesel con el ACPM
- ★ Decreto 383 de 2007: reglamenta el establecimiento de zonas francas especiales, para proyectos de alto impacto económico y social.

Fuente: Ministerio de Agricultura.

Concordante con lo anterior, el Gobierno ha fijado la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol en 10% y de ACPM con agrodiesel en 5%, mezcla que en 2010 será obligatoriamente de 10%, y para el año 2012 todos los motores que se produzcan en Colombia deben tener la flexibilidad para una mezcla mínima de 20% con etanol o agrodiesel. Es así como se han creado las condiciones propicias que aseguran el consumo de los agrocombustibles en el mercado doméstico. Pero hay que señalar que el país tiene un parque automotor viejo y nada se ha previsto para su adaptación.

Las consideraciones expuestas demuestran que el objetivo es convertir al país en una "potencia" de agrocombustibles, proceso liderado por el presidente Álvaro Uribe, quien argumenta que el país tiene condiciones climáticas y de suelo propicias para ponerse a la par con Brasil en la producción de etanol y agrodiesel y ha llegado a plantear la meta de 3,5 millones de hectáreas sembra-



das en palma de aceite para agrodiesel y otro tanto en caña u otros géneros para producir etanol. Por esta razón permanentemente envía mensajes de seguridad a los inversionistas privados y destina gran parte del presupuesto nacional en la construcción de infraestructura para la exportación.

El Gobierno también ha determinado fórmulas de precios para etanol y agrodiesel que han dado seguridad a los inversionistas. Es así como el Ministerio de Agricultura ha transferido recursos de financiación para el sector de agrocombustibles, tanto en su parte agrícola-primaria como en su parte industrial; por ejemplo, en el año 2007 pagó 6.100 millones de pesos en incentivos no reembolsables; financió 20.500 millones de pesos, vía crédito blando, al programa agro ingreso seguro (AIS) para el desarrollo de aproximadamente 9.200 hectáreas nuevas de palma aceitera; extendió esos incentivos no reembolsables para la renovación de plantaciones existentes de ese cultivo; y destinó 20.000 millones de pesos en crédito blando del programa AIS para dos proyectos de etanol y dos proyectos de agrodiesel y 4.500 millones de pesos para una extractora de aceite de palma (Minagricultura, 2007). Ningún otro cultivo en Colombia tiene tantos beneficios estatales como la palma de aceite. En el gráfico 1 se puede apreciar cómo, a partir de la década de los años noventa, el crecimiento de los cultivos de palma en producción se ha disparado de forma significativa y cómo en el presente decenio lo han hecho los cultivos en desarrollo.

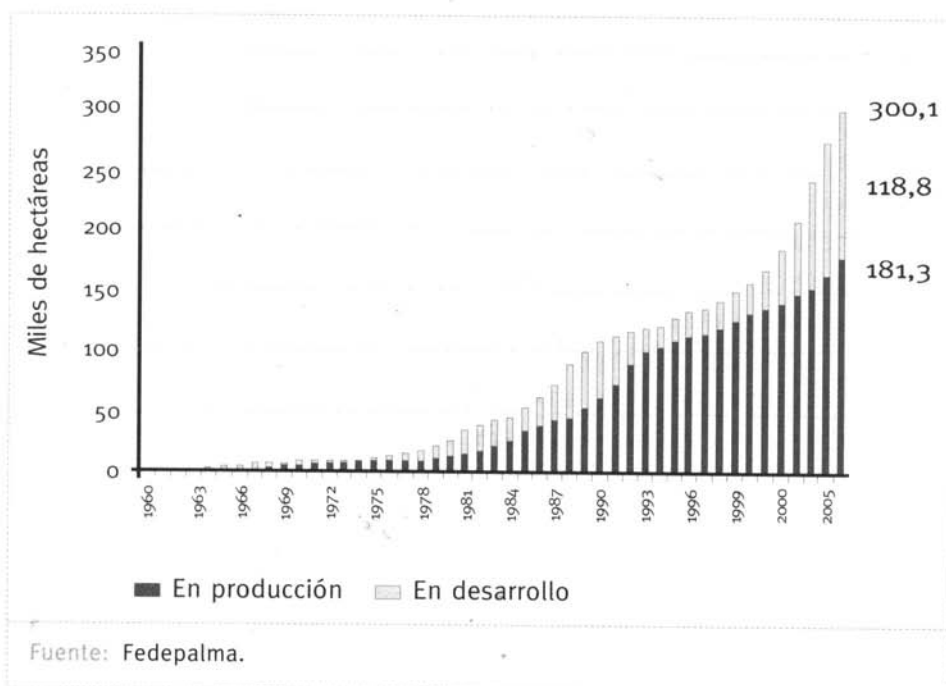
De igual forma, el Ministerio financia proyectos de investigación en agrocombustibles por 20.000 millones de pesos para los próximos cuatro años, cuyo fin es mejorar la productividad del etanol y el agrodiesel que se produce en Colombia y para evaluar materias primas alternativas y eficientes para la producción de los agrocombustibles.

En el país, actualmente, se genera 1,1 millón de litros diarios de etanol a partir de caña de azúcar y 170.000 litros diarios de agrodiesel a partir de palma, todo con inversión privada. Pero, además, tres nuevos proyectos de agrodiesel a partir de palma aceitera entran en operación a principios de 2008, con la meta de producir 900.000 litros diarios de agrodiesel, con un paso en hectáreas sembradas de 293.000 a 700.000 en 2010. Esta estrategia parte del supuesto de que Colombia cuenta con cuarenta millones de hectáreas subutilizadas en ganadería extensiva y rastrojo, que pueden ser reconvertidas a cultivos abastecedores de materia prima para agrocombustibles: palma, caña, higuera, yuca, madera, etc.



Gráfico 1

Evolución del área sembrada en palma de aceite
(Colombia, 1960-2006)



Proyectos actuales y en construcción

Etanol

Según el Ministerio de Agricultura², el país comenzó a implementar la iniciativa de alcohol carburante en el suroccidente del país. En octubre de 2005 se inauguró la primera planta productora de alcohol a partir de caña de azúcar y en la actualidad están funcionando cinco plantas (Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez, Risaralda) que producen diariamente 1,05 millones de litros de alcohol carburante a partir de la caña de azúcar y cuya producción se destina principalmente a abastecer el mercado interno.

² Consultado en <http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx>.



En el cuadro 1 se relacionan los actuales proyectos de plantas de etanol en el país y en el gráfico 2 las áreas proyectadas para producción de ese agrocombustible.

Cuadro 1 Proyectos para producción de etanol

Inversionista	Capacidad (miles de litros diarios)	Municipio	Departamento	Materia prima
Ingenio Central Castilla	200	Zona rural de Pradera	Valle del Cauca	Caña
Ingenio Riopaila	150	Corregimiento de La Paila	Valle del Cauca	Caña
Petrotesting S.A.	20	Puerto López	Meta	Yuca
Alcohol S.A.- Alcoholes Río Suárez	150-350	Guepsa (hoya del río Suárez)	Santander	Caña
Sucrol S.A.	70-100	Vía Sincelejo- Montería	Sucre	Yuca
Maquitech-Maquilagro	300	Duitama-Tuta	Boyacá	Remolacha
Faquin	150	Tebaida, Montenegro, Caicedonia	Quindío	Caña
Etanol Consortium Board	300	Mahates, Arjona y Maríalabaja	Bolívar	Caña
Bioenergy S.A.	150	Puerto López	Meta	Caña
De Sargo Ltda.	100	Codazzi	Cesar	Yuca, maíz
Maquitech-Maquilagro	300		Cundinamarca	Remolacha
Maquitech-Maquilagro	300		Cesar	Remolacha
Maquitech-Maquilagro	300		La Guajira	Remolacha
Maquitech-Maquilagro	300		Magdalena	Remolacha
Etanol Consortium Board	300	San Onofre- Tolú Viejo	Sucre	Caña
Etanol Consortium Board	300	Momil y Purísima	Córdoba	Caña



Inversionista	Capacidad (miles de litros diarios)	Municipio	Departamento	Materia prima
Gobernación del Tolima, Fábrica de Licores	300		Tolima	Caña, yuca
Monómeros Colombo Venezolanos	50	Barranquilla	Atlántico	
Goldman & Bradstreet	300	Hoya del Río Suárez	Santander-Boyacá	Bagazo
Etanoles de Colombia S.A.	300	Baranoa	Atlántico	Maíz amarillo
Cecoonor	100	Vegachi	Antioquia	Caña
Gobernación de Caldas	150	Vía Manizales-Medellín	Caldas	Caña
World Group Colombia	330	Montería, San Bernardo, Lórica	Córdoba	Yuca
Programa life-PNUD	200-250	Canal del Dique, San Onofre, San Pedro	Bolívar	Caña o yuca
Gobernación de Norte de Santander	250	Zulia	Norte de Santander	Caña
Ecopetrol-Petrobras				Caña
Proyecto Luis Ricardo Roa			Tolima	Caña
Proyecto Luis Ricardo Roa			Norte de Santander	Caña
Universidad Nacional-CIB			Urabá	Banano

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2007.

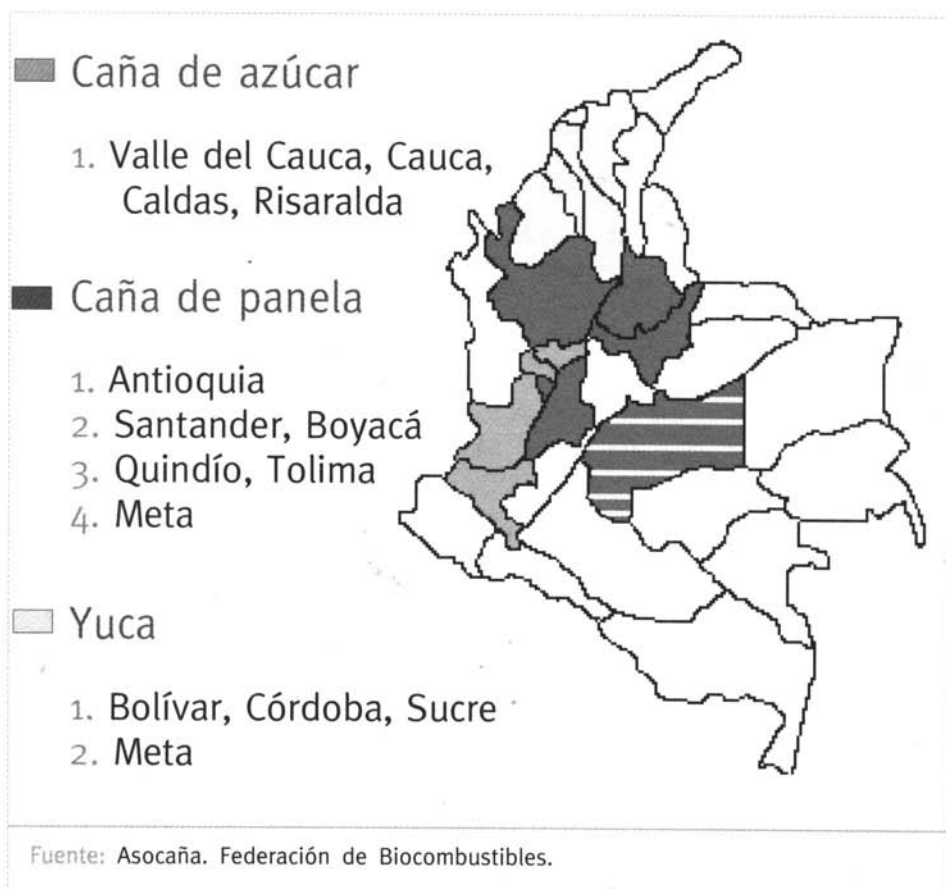
Agrodiesel

Actualmente están en construcción cinco proyectos de producción de agrodiesel a partir del aceite de palma, de los cuales tres se desarrollan en la región norte (Oleoflores, Odin Energy, Biocombustibles Sostenibles del Caribe) y dos en la región oriental (Biocastilla, Bio D S.A.), que, para finales de 2007, deben producir un total de 315.000 t/ha. Adicionalmente están en desarrollo otros cuatro proyectos: en la zona central (Ecopetrol), en la región oriental



Gráfico 2

Áreas proyectadas para producción de etanol



(Manuelita), en la región occidental y en la zona norte, que se estima produzcan en el año 2008 un total de 400.000 t/año³.

En el cuadro 2 se muestran los proyectos de producción de agrodiésel en Colombia y en el gráfico 3 las áreas proyectadas para producción de ese agrocombustible.

³ Consultado en <http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx>.



Cuadro 2

Proyectos para producción de agrodiesel

Inversionista	Capacidad (miles de litros diarios)	Municipio	Departamento	Materia prima
Biodiesel Las Flores- Oleoflores	175	Codazzi	Cesar	Aceite de palma
Ecodiesel S.A.	351	Magdalena Medio	Santander	Aceite de palma
Bio D	351	Facatativá	Cundinamarca	Aceite de palma
Aceites Manuelita S.A.	351	San Carlos de Guaroa	Meta	Aceite de palma
Biocombustibles Sostenibles del Caribe	351	Santa Marta	Magdalena	
Biocastilla	123	Castilla la nueva	Meta	Aceite de palma
Odin Energy	126	Santa Marta	Magdalena	Aceite de palma
Biodiesel de Colombia	351	Tumaco	Nariño	Aceite de palma
Proyecto Asociativo de la Zona Norte	351	Santa Marta- Fundación	Magdalena	
Ecopetrol-Petrobras	70	Barrancabermeja	Santander	Higuerilla
Ecopetrol	351	Cartagena	Bolívar	Aceite de palma
Biodiesel Las Flores- Oleoflores	351	Maríalabaja	Bolívar	Aceite de palma
Biodiesel Las Flores- Oleoflores	351	Santa Marta	Magdalena	
Cia. Agroforestal Colombia	1.052	Puerto Carreño	Vichada	Jatropha

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2007.



Gráfico 3

Áreas proyectadas para la producción de agrodiesel



Fuente: Fedepalma. 2007.

Agroindustria, gobierno y violencia

Tal y como lo señaló el periódico *El Espectador*, en el artículo de Norbey Quevedo titulado *El zar del agro*⁴, en el país "los primeros cultivos comerciales de palma fueron implantados en 1945 por la United Fruit Company"; a me-

⁴ Edición del 16 de junio de 2007.

diados de los años sesenta la producción llegó a 18.000 hectáreas. Hacia finales de los años setenta "surgió la hacienda Las Flores, un complejo agroindustrial de propiedad de Carlos Murgas y su familia, que se dedicó a cultivar palma en Codazzi", municipio del Cesar. Para los años noventa la siembra era cercana a las 50.000 hectáreas y hoy en día el país cuenta con alrededor de 300.000 hectáreas.

Continúa afirmando *El Espectador*, que "Carlos Murgas Guerrero es uno de los empresarios más reconocidos del agro", dueño de extensos terrenos en el Cesar y uno de los gestores del negocio de la palma de aceite. Ha sido funcionario de los gobiernos de César Gaviria y Andrés Pastrana, pero también ha sido un promotor del presidente Uribe, sobre todo en la Costa Caribe (su área de influencia). Mucho se ha documentado sobre los beneficios que él recibe para desarrollar su rentable actividad agropecuaria, que pasan por grandes exenciones de impuestos, así como una legislación que ha sido totalmente cambiada para el desarrollo de la actividad palmicultora. Y esto gracias a su paso por el Gobierno, en donde como Ministro de Agricultura diseñó lo que después sería el gran negocio del aceite de palma, consolidando un complejo agroindustrial con varias empresas en donde él participa en toda la cadena productiva, desde la siembra hasta su comercialización.

Y es que la estrecha relación entre el sector palmero y el Gobierno saltan a la vista, no solamente en el caso de Murgas. Está también César De Hart, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), quien es esposo de la ex ministra de Comunicaciones del actual Gobierno, Martha Pinto de De Hart, y Jens Mesa, presidente de Fedepalma y esposo de la actual Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra de la Espriella, lo cual demuestra el vínculo innegable de los dirigentes del sector palmero con el Gobierno nacional, que ayuda a entender los excesivos beneficios que tienen hoy día.

Por supuesto esto va acompañado de la convicción del propio presidente Uribe en el negocio de la palma aceitera y sus derivados, pues ha llegado a plantear que este cultivo es vital para el desarrollo del país; y cómo no, si es que sus campañas presidenciales han recibido financiación y apoyo de diez empresas palmicultoras, entre ellas Oleoflores de propiedad de Murgas. Es más, una vez elegido Uribe Vélez, en 2002, se reunió con los palmicultores en su congreso anual y allí hizo un llamado a los empresarios para que sembraran 80.000 nuevas hectáreas de palma durante su Gobierno y les ofreció beneficios como la obligatoriedad paulatina de mezclar el agrodiesel con el



diesel o el ACPM⁵. Por esta razón, actualmente Murgas tiene dentro de su complejo empresarial una de las plantas para el procesamiento del combustible en Codazzi, un negocio que se estima derivó inversiones cercanas a los 15 millones de dólares.

A estos beneficios se suman el financiamiento de cultivos con recursos del Plan Colombia, giros del gobierno estadounidense, por intermedio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), con el programa Mideas (Más inversión para el desarrollo alternativo sostenible), más millonarios créditos del Banco Agrario, de Finagro y del propio Ministerio de Agricultura.

Toda esta cadena del negocio ha tenido como socios a los grupos paramilitares, quienes no solo se han vinculado a varios proyectos de palma, sino que del mismo modo han desplazado violentamente a comunidades locales, especialmente en el departamento de Chocó, para la extensión del cultivo, tal y como fue denunciado en diciembre de 2007. Hay 23 empresarios de palma rindiendo indagatoria por este delito, y la investigación se apoya en la contratación de grupos paramilitares por parte de estas empresas para quedarse con las tierras de comunidades negras.

Y es que tragedias como las ocurridas en el Chocó, en los municipios de Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó, en donde los paramilitares expulsaron por vía armada a las comunidades para apoderarse de sus tierras, parecen esclarecerse probando la participación de empresas palmeras como Selva Húmeda, Urapalma, Palmura, Inversiones Agropalma, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas de Curvaradó e Inversiones Fregny Ochoa, a la cuales se les acusa de concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzado.

Sin embargo, a pesar de los serios cuestionamientos y de las denuncias por parte de organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientalistas, la extensión de los cultivos para agrocombustibles continúa en otros sitios del país, con el mismo modelo del Chocó. Es más, en el plan nacional de desarrollo de este mandato y en el Plan Visión 2019 se le sigue dando gran valor al tema, por lo que se siguen otorgando estímulos, aparte de un documento Conpes

⁵ Periódico *El Espectador* del 16 de junio de 2007.

para el sector palmero, que explican, entre otros, lo ya comentado acerca de la inserción de Colombia al Plan Puebla Panamá.

En la misma dirección se mueve la Organización Ardila Lülle⁶, uno de los principales grupos económicos que operan en el país y que abarca desde la industria de bebidas gaseosas, comunicaciones (RCN), sector disquero (Sonolux), textil (Coltejer) y agropecuario (Agroindustrias de Urabá, Bananal, Ganadería Hipsala, Ganadera Seguros)⁷. Ardila Lülle se precia de ser "el productor individual de azúcar más grande del mundo", pues controla más de 33% de la producción y el mercado (Silva-Colmenares, 2004:208-218). Es propietario del Ingenio Cauca, tiene 52% de Providencia y por lo menos 35% del Ingenio Risaralda. Estos tres ingenios producen 65% del etanol.

El oligopolio azucarero es completado por los grupos Caicedo (ingenios Riopaila y Castilla), quienes ligan su producción con la empresa Colombina, productora de confitería (Espinal, Martínez y Beltrán, 2005), junto a Manuelita⁸, que produce otro 20% de etanol para el país, (posee además en Perú la empresa Laredo y participa de la empresa Vale de Paraná en Brasil) y Mayagüez, de las familias Holguín, Correa y Hurtado, con una producción de 15% (Silva-Colmenares, 2004).

Estas familias dueñas de los ingenios han estado unidas a los partidos tradicionales, especialmente al partido conservador, del cual eran jefes los Caicedo, los Garcés y los Holguín. En el año 1977, doce ingenios pertenecientes a cuatro familias controlaban el 76,3% del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal (17,8%) y Garcés (4,5%) (Silva-Colmenares, 2004). Por lo demás, los lazos matrimoniales entre estas familias eran y son múltiples (Mondragón, 2007).

⁶ Ha apoyado la elección de los presidentes Pastrana y Uribe.

⁷ Sobre la estructura del grupo Ardila Lülle ver: Naranjo Ojeda, Luis Bernardo. *La República*, 18 de diciembre de 1998, Bogotá:3B; y Silva-Colmenares, Julio. 2004. El gran capital en Colombia. Planeta. Bogotá: 181-218.

⁸ Ingenio que es el principal proveedor de Coca-Cola y expandió sus actividades a la palma aceitera en el departamento del Meta y otros lugares de los Llanos Orientales, en donde se espera producir agrodiesel.



Es así como se entiende, el papel de Asocaña⁹, gremio que ha liderado el proyecto del etanol en el sector azucarero y desde hace varios años ha influido en los cambios normativos, los aspectos técnicos y la selección de tecnologías. Como resultado de este dominio consiguieron la reglamentación técnica, ambiental y la interlocución con los diferentes actores del tema. Un ejemplo claro de ello es el reconocimiento que Ricardo Villaveces (presidente de Asocaña por veinte años) hace al ex ministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía, en el cual lo reconoce como "un líder indiscutible; puede sentirse muy satisfecho de haber sido elemento determinante para que Colombia haya entrado con pie derecho en el prometedor mundo de los agrocombustibles" (Villaveces, sf).

Así mismo, Asocaña participó en la fundación de la Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles), entidad vocera de varios de los temas relacionados con esta actividad y promotora de nuevos desarrollos en varios sitios del país. Asocaña se encargó de gestionar y tramitar directamente las licencias ambientales para la producción de etanol –licencias DG números 415/04, 416/04 y 432/04–, expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). También fue la que convocó a las comunidades afrocolombianas, mediante las audiencias públicas, para que aprobaran dichos proyectos.

La tenencia de la tierra

Este tipo de agroindustria se caracteriza por fuertes enfrentamientos por la propiedad de la tierra, que aún hoy en día persisten. Su desarrollo ha sido sobre la base de la apropiación de la tierra por las empresas que controlan el negocio, como el despojo de indivisos (parcelas de tierra que tenían las familias en posesión material, sin escrituras).

En la mayoría de casos se expropia a los poseedores de estas tierras por diversas vías: problemas con la escrituración, terrenos con falsa tradición, adjudicación de baldíos, cambios en la vocación agrícola que se tenía para favorecer el monocultivo, etc. Una de las formas de expropiación fue la violencia

⁹ La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia es un gremio que desde su fundación, en 1959, ha sido controlado por los ingenios.



ejercida contra los propietarios que no tenían escrituración sobre la tierra. Otra forma fue con la figura del arrendamiento que se veían obligados a hacer los campesinos a las empresas palmeras o cañeras, que con el tiempo se convertían en propiedad del arrendatario mediante del engaño. Fueron muchos los años de ocupación y, por ejemplo, los ingenios azucareros se aprovecharon de la ignorancia de los propietarios para hacerlos firmar o colocar su huella y así quedarse con sus tierras. Cuando se dieron cuenta, ya no eran dueños de la tierra, sino únicamente de la vivienda, normalmente una pequeña casa, pero la tierra de cultivo había cambiado de dueño. Habían sido despojados de sus parcelas (PNUD, 2007).

El conflicto por la renta capitalista de la tierra explica por qué los grandes perdedores siempre han sido las comunidades campesinas, indígenas o locales, que cuando no fueron expropiadas en nombre de la modernización, les tocó perder en el reparto del excedente capitalista. Pero de una forma u otra siempre han tenido que pagar por el acceso a una tierra que originalmente era suya. Así las cosas, los cimientos de este modelo están en la expropiación de la tierra.

Condiciones laborales

La realidad del trabajo y los salarios son deplorables en esta agroindustria. El trabajo en los ingenios de azúcar ha sido calificado como un trabajo degradante, por las condiciones poco saludables en que los corteros viven. Ellos representan casi la mitad de la fuerza laboral de los ingenios y realizan el trabajo físico más exigente. A ellos, a lo largo de la historia, los han explotado y resulta inaudito que en pleno siglo XXI los trabajadores hagan las mismas exigencias que en 1953, año en donde se realizó el principal paro de trabajadores de la caña. Se trata de peticiones mínimas, como que las condiciones de transporte para los obreros fueran dignas, que se cambiaran los camiones y volquetas por buses; demandas de sanitarios en los frentes de trabajo; zonas apropiadas para comer y una remuneración justa por tonelada de caña cortada.

Pareciera que el tiempo no pasara y esas mismas exigencias estuvieron en el centro de la huelga del año 2005, en la que se levantaron los corteros de la caña. Empezaron 2.700 corteros del Ingenio del Cauca (Incauca), quienes bloquearon la entrada al ingenio y presentaron un pliego de peticiones. La movilización de los obreros y sus familiares, el respaldo de comerciantes, polí-



ticos e inclusive de la población, más la solidaridad del movimiento sindical, permitieron que otros 7.000 corteros de los ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central Tumaco, Castilla y María Luisa entraran en la huelga paralizando la producción.

No se distancia esta situación de la que viven los trabajadores de la palma, quienes también señalan que su trabajo es como una nueva forma de esclavitud. El deterioro de los ingresos de los trabajadores lleva a que no ganen ni siquiera el salario mínimo. Junto a los trabajadores de la caña, viven en los barrios marginales de los pueblos en donde hay cultivos y en condiciones de hacinamiento.

Lo anterior demuestra que el gran crecimiento de la industria de los agrocombustibles es sobre la base de la explotación laboral, del despojo a los trabajadores de sus mínimos derechos, de las políticas de protección y subvenciones del Gobierno y de la tenencia de la tierra; solo así es como se soporta esta agroindustria. Y es que la flexibilización laboral aplicada en el país desde los años noventa hizo que nuevas formas de contratación tomaran fuerza, como las de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) (Aricapa, 2006). Las empresas palmeras y cañeras adoptaron ese esquema y, cómo no, si es que este propicia:

- ✧ La eliminación de los derechos de contratación colectiva y la organización sindical de los trabajadores
- ✧ El suministro de mano de obra a terceros
- ✧ Que los asociados asuman por igual los riesgos de cada labor que se ejecuta
- ✧ La afiliación en forma parcial a la seguridad social a los trabajadores
- ✧ La obligación a cada trabajador de firmar un documento en el que se expresa el deseo de retirarse voluntariamente
- ✧ La existencia de cooperativas de diversa índole: venta de insumos a los hogares, venta de herramientas para el trabajo, etc., generalmente con mayores precios.

Este sistema de cooperativas existe por el marco legal impuesto, que responde a las exigencias del mercado y que hace posible perpetuar las precarias condiciones laborales de los trabajadores de los agrocombustibles y de otros sectores de la economía. Trae graves perjuicios porque al aparecer intermediarios en la contratación se menoscaba la calidad del trabajo, se disminuye

la remuneración por la mano de obra, se pierden ingresos y, en consecuencia, se acaba el bienestar de las familias de los trabajadores. La "deslaborización" lleva también al fin de la seguridad social y, en la práctica, los trabajadores pierden el derecho a la negociación colectiva, a la organización y a la asociación sindical.

En consecuencia, los propulsores de los agrocombustibles afirman que estos mecanismos generarán empleo. Para el caso del etanol, Asocaña señala que, con el nivel actual de producción de alcohol, los empleos vinculados corresponden a 40.600, cifra que aumentaría a 56.900, con una mezcla de 10% de etanol en gasolina, en todo el país y a 138.300, para una mezcla de 25%. En el caso del área plantada, el gremio afirma que se pasaría de 37.000 hectáreas de caña del año 2006 a 72.000 en 2020. Pero lo cuestionable es cómo y qué tipo de empleo generará este negocio, si continuarán incrementando las diferencias entre los pocos trabajadores que aún están vinculados directamente a las empresas y los que trabajan mayoritariamente en las cooperativas, pues es cierto que la tendencia es la de acabar la pequeña contratación directa que subsiste y más bien seguir creando nuevas CTA. Pero si las expectativas son la de ampliación de hectáreas cultivadas y la de generar mayor cantidad de litros de etanol, esto llevará sin lugar a dudas a una mayor mecanización en el sector, lo que reduce significativamente las posibilidades de creación de empleos en torno a este negocio. Para tener un punto de referencia, en Brasil se calcula que cien hectáreas para agricultura familiar generan 35 puestos de trabajo, mientras que las mismas cien hectáreas para la producción de agrocombustibles solo crean diez puestos.

Agronegocios y megaproyectos

Pero quiénes son los grandes ganadores de estos agronegocios, es la pregunta recurrente cuando se lee sobre este tema. Varios señalan que las grandes multinacionales de cereales y otros convergen en que los agropetronegocios, es decir, empresas como Dupont-BP, Abengoa-General Motors, Repsol-Acciona, Cargill, ADM, Monsanto, por solo citar algunas.

Lo cierto es que este agronegocio requiere de obras de infraestructura para su respectivo transporte y exportación, así que megaproyectos contemplados dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) cobran un carácter estratégico, en materia de hidrovías, autopistas, puertos y grandes corredores multimodales.



Para ello han llegado al país inversionistas extranjeros como el J.P. Morgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo, que está interesado en proyectos de inversión en Vichada; la multinacional de alimentos norteamericana Cargill ha invertido en estudios sobre la viabilidad de un gran proyecto, probablemente para la producción de aceite, en la que ya tienen experiencia en vastas plantaciones en Malasia, y para lo cual el Gobierno ha destinado casi 50.000 millones de pesos para adecuar la navegación del río Meta (proyecto contemplado en la lirsá).

Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación ha enfatizado en mostrar las nuevas plantas de procesamiento para los agrocombustibles, la construcción de poliductos, corredores viales de comercio exterior, la red fluvial, red férrea, sociedades portuarias que se quieren constituir en Bahía Málaga, Tribugá, Turbo, Terlica S.A. en Santa Marta, y, en cuanto a transporte fluvial, proyectos para navegabilidad en el río Magdalena y río Meta. En el cuadro 3 se evidencian los principales megaproyectos y su respectiva inversión.

Cuadro 3

Promoción de la inversión en agrocombustibles: infraestructura

Megaproyecto	Inversión (millones de dólares)
Corredor Vial Bogotá-Buenaventura	1.628
Cruce Cordillera Central Túnel II Centenario (La Línea)	119
Concesión Vial Ruta del Sol	2.500
Concesión Vial Valle de Aburrá-Golfo de Urabá	270
Concesión Vial Ruta Caribe	245
Concesión Vial Ruta de la Montana	593
Sociedad Portuaria de Buenaventura	450
Sociedad Portuaria de Cartagena	88
Sociedad Portuaria de Santa Marta	127
Sociedad Portuaria de Barranquilla	178

Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

La tierra prometida del Vichada

Inicialmente la teoría de "Vichada la tierra prometida" se planeó como un proyecto de desarrollo alternativo. Desde abril de 2005 el presidente Uribe, en Japón, invitó a los empresarios de ese país a invertir en el proyecto Vichada-Meta-Orinoco. En agosto de 2006 el país conoció el anuncio del Gobierno de Uribe sobre el estudio de proyectos productivos en un área de 6,3 millones de hectáreas para agricultura y ganadería dirigidos a familias desplazadas en Marandúa, Vichada:

hay un proyecto inicial –dijo el presidente– para instalar mil familias de desplazados y unos proyectos productivos importantes que les garanticen calidad de vida y con operadores particulares que los integre [...] Para el desarrollo de este proyecto se contempla la participación del Sena y recursos del incentivo a la capitalización rural (ICR) que servirán para su puesta en marcha [...] Las familias beneficiadas con el proyecto serían capacitadas en el manejo de maquinaria y técnicas agrícolas para el desarrollo de los proyectos productivos que se realizarían en la zona.

El departamento del Vichada, o mejor el megaproyecto que se quiere hacer allí, es quizás una de las apuestas más grandes de este Gobierno. Al parecer hay estudios que señalan que las tierras son aptas para cultivos destinados a agrocombustibles. Se han anunciado, entonces, inversiones millonarias extranjeras y sus terrenos hoy día son apetecidos (Semana, abril de 2007). A este proyecto se le conoce como Renacer de la Orinoquia, que incluye:

- ✧ *Carimagua* y *La Libertad*, dos granjas experimentales del Gobierno dedicadas a la investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria, en donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), un organismo miembro del Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), ha conformado un importante banco de germoplasma y dispone de un acervo de tecnologías apropiadas para las regiones de la Altillanura en el departamento del Meta y las sabanas altas de la Orinoquia, en el departamento de Vichada.
- ✧ *Gaviotas*, que pretende cubrir tres millones de hectáreas con palma aceitera y pino caribe, que ocasionaría un impacto ecológico enorme. El Gobierno espera, además, vincular a los reinsertados de los grupos paramilitares en el desarrollo de este proyecto.



- ✱ *Marandúa*, otro lugar de la deshabitada Vichadà, en donde el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le asignó a la Fuerza Aérea 63.000 hectáreas para que las desarrollara. El objetivo es que bajo el nombre de Marandúa Inc., la fundación Zeri realice un proyecto de similares características al de Gaviotas, que en siete años cubra 100.000 hectáreas y que en doce haya duplicado los cultivos.

En ese sentido, inversionistas colombianos ya dieron sus primeros pasos en la región. Hay 450 hectáreas sembradas de caucho, de un proyecto de 6.500 (el de mayor dimensión de América), cerca de Puerto Carreño, que, según se afirma, es de propiedad de 24 asociaciones de productores, el cual ha estado fuertemente cuestionado ya que fue financiado por Finagro¹⁰, por intermedio del Fondo de Ganaderos del Caquetá, y en el que participó el narcotraficante Miky Ramírez generando un gran escándalo y dejando el proyecto a medio financiar (Semana, mayo de 2007).

Esto se entiende si se revisa todo el tema de titulación de baldíos que ha venido haciendo el Incoder durante este Gobierno, puesto que en el periodo comprendido entre agosto de 2002 a junio de 2006 se expidieron 11.494 títulos en todo el país, sobre una área de 1'782.701 hectáreas (ver cuadro 4), en beneficio de 31.562 familias, de las cuales 63,8% corresponde a comunidades negras (20.129 familias) y 36,2% a colonos (11.433 familias).

Esta situación implica que titularon anualmente la mitad de lo que titularon en la historia del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora)¹¹, puesto que en cuarenta años esta entidad tituló más de trece millones de hectáreas a colonos, mientras que en cuatro años en este Gobierno debieron titular 1'300.000 hectáreas y titularon solo la mitad, es decir que el ritmo de lo que se venía titulando se redujo a la mitad. Lo anterior se explica principalmente porque las tierras se están preparando para los grandes inversionistas y empresas, como el J.P. Morgan y Cargill, a los cuales ya se hizo referencia.

¹⁰ Banco de segundo piso, dedicado al fomento del sector agropecuario.

¹¹ Hoy en día Incoder.



Cuadro 4

Titulación de baldíos por tipo de beneficiario

Periodo	Colonos			Comunidades negras			Total		
	Títulos	Familias	Has.	Títulos	Familias	Has.	Títulos	Familias	Has.
Ago-dic 2002	nd	nd	nd	25	7.968	387.278	25	7.968	387.278
2003	259	259	3.224	14	3.422	275.211	273	3.681	278.435
2004	3.998	3.998	255.007	5	1.011	105.309	4.003	5.009	360.316
2005	6.333	6.333	261.796	14	7.032	361.330	6.347	13.365	623.127
Jun-06	843	843	91.593	3	696	41.953	846	1.539	133.546
2002-jun 2006	11.433	11.433	611.621	61	20.129	1'171.081	11.494	31.562	1'782.701

Fuente: Incoder.

nd: no disponible.

La titulación de tierras al senador Merheg

Se dice que 16.330 hectáreas de tierras baldías fueron tituladas a finales del año 2006 por el Incoder a trece personas cercanas a la actividad del senador risaraldense Habib Merheg, que van desde su secretaria personal, abogado, directivos de la empresa Cable Unión de Occidente, empresa con la que Merheg estuvo vinculado hasta 2002 cuando ingresó a la política, y otros funcionarios de la misma compañía, pasando por recepcionistas y operarios. Las tierras están ubicadas en el municipio Primavera, departamento de Vichada, que limita con Venezuela. El 30 de octubre y el 17 de noviembre de 2006 son las fechas en las que se expidieron las resoluciones que adjudicaban las tierras a los conocidos del senador; se entregaron otras 21.805 hectáreas a 18 personas más (Semana, abril de 2007).

Pero es conveniente recordar qué son los baldíos. Son tierras que pertenecen a la Nación y por ley solo se pueden entregar a colonos que demuestren que llevan más de cinco años ocupando y explotando por lo menos el 80% del área. Lo máximo que se entrega por persona es lo que se llama la unidad agrícola familiar (UAF), que corresponde a una porción de tierra que garantiza la subsistencia de una familia, y la extensión varía de acuerdo con la productividad de la tierra. Para Vichada la UAF equivale a máximo 1.294 hectáreas.



Si se consideran las declaraciones de los amigos del senador Merheg a *Semana*, en las cuales reconocen no haber ido nunca a los Llanos, se comprueba que no cumplen con los requisitos de adjudicación. Lo asombroso es que mientras campesinos de la región llevan años esperando el título de sus parcelas, este grupo de inversionistas logró hacerlo en tan solo seis meses, pues la solicitud la hicieron en mayo de 2006. Pero más sorprende el reconocimiento del director del Incoder, Rodolfo Campo, al declarar que lo sucedido es ilegal y que se pudo haber incurrido en un fraude procesal.

Lo cierto es que en Vichada, en el año 2004, se titularon 43 predios baldíos y en 2005, 15 predios, mientras que en 2006 se entregaron títulos a 277 baldíos.

Algunas consideraciones finales

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que Colombia es el segundo país en América Latina con mayor desnutrición, con alrededor de 6 millones de personas. Sugiere también que se debe diseñar una política de Estado que asegure la alimentación de los ciudadanos como un derecho, ya que en América Latina solo algunos países, como Argentina, Brasil, Ecuador y Guatemala, aseguran en sus constituciones y otras leyes nacionales la alimentación como derecho.

La discusión fundamental radica, entonces, en la intención de ampliar la frontera agrícola para agrocombustibles, como lo plantea el Gobierno, o para la alimentación, como argumentan las organizaciones campesinas en todo el Globo. Con la política de promoción de los agrocombustibles se atenta contra la soberanía alimentaria, en tanto que la tierra para producción de alimentos ahora será reservada para la producción de combustibles. Esto ocasiona impactos negativos de todo tipo: desabastecimiento de los productos de la canasta familiar, especulación en los precios de los alimentos, aniquilamiento de la economía campesina, incorporación de los campesinos o pobladores de estas zonas a las plantaciones abandonando su cultura y forma de relacionamiento con el campo, así como mayor utilización de agrotóxicos para estos monocultivos.

Esa competencia por el uso de la tierra también repercutirá en el valor del agua y, por supuesto, en su apropiación, ya que el uso de agua para este tipo de monocultivos es de enormes proporciones, no solo de aguas superfi-



ciales en las que se hacen trasvases para el riego de las plantaciones, sino de aguas subterráneas y otro tipo de acuíferos; por ejemplo, para el caso del monocultivo de caña de azúcar del Valle del Cauca se requieren cien millones de metros cúbicos en un año para el riego de 200.000 hectáreas.

Los agrocombustibles, además, son perjudiciales porque los cultivos base de su producción originan desplazamientos de poblaciones enteras que terminan por acabar la economía campesina, pues a pesar de que en el discurso se presentan como generadores de empleo, lo que vemos en la práctica es que este tipo de industria expulsa al campesinado y configura una agricultura sin agricultores, sumada a la concentración y privatización de la tierra y fuentes de agua, la erosión de la biodiversidad, la destrucción de ecosistemas naturales, violencia y militarización, en función del control de los recursos naturales.

Otro aspecto para tener en cuenta es que al ser cultivos de tardío rendimiento, como es el caso de la palma de aceite, el retorno de las inversiones no se da antes de los cinco años de su siembra. Por esta razón este agronegocio es rentable en unidades de producción superiores a las cincuenta hectáreas, es decir, solo puede pertenecer a medianos y grandes propietarios.

En países como el nuestro, en donde tres de cada cuatro personas pobres habitan en zonas rurales, la mayoría depende directa o indirectamente de la agricultura para la subsistencia, lo cual hace de este problema algo verdaderamente dramático. Es por ello que este asunto cobra cada vez más fuerza, pues corresponde a un proceso global, hegemónico y dialéctico que conduce a una crisis ecológica, al final de la soberanía alimentaria de los países, que ligado al uso de las semillas transgénicas, la imposición de los derechos de propiedad intelectual y la mercantilización de la naturaleza, desencadenará en la privatización absoluta de la vida y a un mayor grado de dependencia y de saqueo de nuestros territorios. Adicionalmente, los meganegocios asociados a mercados de sumideros de carbono, enormes contaminadores industriales, reciben de los Gobiernos permisos para que compren el derecho a contaminar. Otros proyectos fomentan que los países industrializados financien vertederos baratos de carbono, tales como plantaciones a gran escala en los países del sur, como una forma de evitar la reducción de sus propias emisiones.

Finalmente, estamos ante una ofensiva promoción de los combustibles agroindustriales en todo el mundo, subvencionados con dinero público para el lucro de las grandes empresas, que en lugar de aminorar el calentamiento del



planeta, lo van a agravar, por el incremento desmedido de sus causas: más agricultura industrial, más consumo y dependencia de petróleo, tanto para la maquinaria agrícola como para los agroquímicos, aumento de la deforestación y más erosión de nuestra biodiversidad y patrimonio natural, sobre la base de abusos a los territorios y de derechos de los campesinos, que en todo el mundo son quienes realmente proveen la base alimentaria y la sustentabilidad de los agroecosistemas para la población mundial.

Bibliografía

- Ardila et ál. (editores). 2005. *Colombia y su política exterior en el siglo XXI*. Cerec. Bogotá.
- Aricapa, Ricardo. 2006. Las cooperativas de trabajo asociado en el sector azucarero. Flexibilización o salvajismo laboral. En: Documentos de la Escuela. Ediciones Escuela Nacional Sindical (ENS). Medellín, (58).
- Borón, Atilio. 2007. Biocombustibles el porvenir de una ilusión.
- Espinal, Carlos Federico; Martínez, Héctor J. y Beltrán, Luz Stella. 2005. La agroindustria del azúcar en Colombia. Documento de Trabajo 80. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio de Agrocadenas. Bogotá.
- Grain, 2007. ¡Paremos la fiebre de los agrocombustibles! Revista *Biodiversidad, Sustento y Culturas* (num. 54), octubre.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2007. Biocombustibles, el nuevo yacimiento colombiano. Septiembre.
- Mondragón, Héctor. 2007. Los negocios del biocombustible y de la caña de nuestros empresarios y el gobierno nacional.
- Naranjo Ojeda, Luis Bernardo. *La República*. 18 de diciembre de 1998. Bogotá: 3B.
- PNUD. 2007. *Informe de desarrollo humano para el Valle del Cauca*.
- Revista *Semana*, 2007. El tierrero del senador. El gobierno adjudicó miles de hectáreas baldías en Vichada a personas cercanas al polémico congresista Habib Merheg. 21 de abril.
- Revista *Semana*. 2007. 21 de abril.
- Revista *Semana*. 2007. Mayo.
- Ribeiro, Silvia. 2007. Combustibles 'ecológicos'. Las crisis propician los negocios. En: <http://www.grain.org/biodiversidad/?id=373>.
- Silva-Colmenares, Julio. 2004. *El gran capital en Colombia*. Planeta. Bogotá.
- Valencia, Mario. 2007. El negocio de los agrocombustibles en Colombia: el caso del etanol.
- Villaveces Pardo, Ricardo. Sf. Tiempos de transformación. Asocaña.